



Miguel Armando López Leyva

Fernando Castaños

Julio Labastida Martín del Campo

(COORDINADORES)

Tensiones y desafíos de la democracia

FICTICIA EDITORIAL



COLECCIÓN CAFÉ DE ALTURA • HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Los libros publicados en la Colección “Café de altura. Humanidades y Ciencias Sociales” han sido seleccionados por un Comité Editorial de acuerdo con criterios de pertinencia académica, y han sido aprobados por el mismo órgano con base en las evaluaciones de dictaminadores reconocidos como especialistas en el tema, de conformidad con el método de “doble ciego,” generalmente aceptado para asegurar la originalidad y la calidad de las publicaciones científicas.

Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida su reproducción parcial o total, por cualquier medio, sin el consentimiento por escrito de su legítimo titular de derechos.

TENSIONES Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA
D.R.© los autores

D.R.© Editorial Ficticia, S. de R.L. de C.V.
Por características tipográficas y de diseño editorial Editorial Ficticia, S. de R.L. de C.V.
Sierra Fría 220, col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F.
www.ficticia.com libreria@ficticia.com
Ficticia Editorial es miembro fundador de la AEMI

Primra edición: octubre de 2013

FICTICIA EDITORIAL
Editor: Marcial Fernández
Diseño de la colección y portada: Armando Hartzacorsian
Coordinación editorial: Mónica Villa
Consejero editorial: Raúl José Santos Bernard y Humberto Schettino

Corrección de estilo: Martín de Jesús Yáñez Chirino

ISBN: 978-607-521-034-6

Impreso y hecho en México

Introducción**13**

I

LIDERAZGOS, PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS P**El liderazgo en los procesos políticos.**

Una aproximación a los conceptos de liderazgo personal y liderazgo institucionalizado

JAVIER DUQUE DAZA**31****América Latina en la encrucijada:
problemas públicos y capacidades democráticas****CARLOS MOREIRA****59****Participación, democracia
y el doble reto de la infraestructura en México****J. CARLOS DOMÍNGUEZ****83**

II MOVIMIENTOS, PROTESTAS SOCIALES Y POLÍTICA FORMAL

Los déficits de la democracia,
las islas de la libertad y el fin del autoritarismo

HANK JOHNSTON

103

La imposible reconversión del EZLN en fuerza política legal

MAYA LORENA PÉREZ RUIZ

145

Las protestas sociales en el Perú, entre el fujimorismo
y la transición democrática (1995-2006)

MARTÍN TANAKA

183

III GOBIERNOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

La im/probable democracia del partido cartel.
Nuevo modelo (teórico), mismos resultados (fácticos)

VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

213

Las tensiones de la democracia argentina
y la experiencia kirchnerista (2003-2011)

ANTONIO CAMOU

239

IV

COMICIOS INTERMEDIOS DE MÉXICO, 2

Democracia, deliberación y demagogia durante las
electORALES para las eleCCIONES intermedIAS de 2009

BERNARDO ÁVALOS

281

El movimiento de 2009 que promovía anular el
un estAdo de la opiniÓN pÚBLICA

ÁLVARO CASO

301

La competencia electoral 2009 a nivel fedeRAl

IRMA MÉNDEZ DE HOYOS

313

- Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1986.
- Paige, Jeffrey. *Coffee and Power: Revolutions and the Rise of Democracy in Central America*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.
- Pérez-Díaz, Víctor. *The Return of Civil Society: The Emergence of Democratic Spain*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.
- Piven, Frances Fox, y Richard Cloward. *Poor People's Movements*. New York: Pantheon, 1977.
- Polletta, Francesca. "Free Spaces in Collective Action". *Theory and Society*, 28 (1999): 1-38.
- Priestland, David. *Stalinism and the Politics of Mobilization*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Przeworski, Adam, y Fernando Limongi. "Modernization: Theories and Facts". *World Politics*, 49 (2) (1997): 155-183.
- Reporteros sin Fronteras. *World Press Rankings*. Accessed at: <http://www.rsf.org/IMG/pdf/World_press_ranking.pdf>. [Accessed October 5, 2009], 2009.
- Rupp, Leila, y Verta Taylor. *Survival in the Doldrums: the American Women's Rights Movement 1945 to the 1960s*. Columbus: Ohio State University Press, 1987.
- Slackman, Michael. "Iran Leaders Stage Show of Force as Standoff Escalates". *New York Times*, January 2: A4, 2010.
- Smith, Jackie. *Social Movements for Global Democracy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press, 2008.
- Snow, David. "Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields". In *The Blackwell Companion to Social Movements*, 380-412, New York: Blackwell, 2004.
- Snow, David A., y Robert D. Benford. "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization." *International Social Movement Research*, 1 (1988): 197218.
- Snow, David A.; E. Burke Rochford, Jr.; Steven K. Worden; y Robert D. Benford. "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation". *American Sociological Review*, 51 (1986): 464481.
- Taagepera, Rein. *Estonia: Return to Independence*. Boulder CO: Westview Press, 1993.
- Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States*. Malden, MA: Black-well, 1992.
- . "Processes and Mechanisms of Democratization." *Sociological Theory*, 18 (2000): 1-16.
- . *Democracy*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Tilly, Charles, y Lesley J. Wood. *Social Movements, 1768-2008*. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2009.
- Viola, Lynne. *Contending with Stalinism: Soviet Power and Popular Resistance in the 1930's* Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.
- Worth, Robert F. "Opposition in Iran Meets Crossroads on Strategy". *New York Times*, February 14: A6, 2010.
- Worth, Robert F., y Nazila Fathi. "Thousands Defy Authorities in Protests and Clashes in Campuses". *New York Times*. (December 8): A6, 2009a.
- . "Police Are Said to Have Killed Ten in Iran Protests". *New York Times*. (December 27): A5, 2009b.
- Yun Li-sun, Joseph. "Pyongyang, People Protest against the Poverty Generated by the New Currency". *Asian News*. (January 11), 2010. Accessed at: <http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=17068&size=>>.
- Zald, Mayer N., y McCarthy, John. "Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations". *Research in Social Movements, Conflict and Change*, 3 (1980): 1-20.

LA IMPOSIBLE RECONVERSIÓN DEL EZLN EN FUERZA POLÍTICA LEGAL

MAYA LORENA PÉREZ RUIZ

I. INTRODUCCIÓN

En México los movimientos sociales, particularmente los relacionados con el EZLN, viven una situación crítica: las negociaciones para la paz entre los zapatistas y el gobierno federal siguen suspendidas; si bien se cuenta con una controvertida reforma en materia indígena aprobada en 2001, ésta no convence a la mayoría de las organizaciones indígenas; el movimiento indígena que apoyó a los zapatistas está dividido y en reflujo; existen en el país varias organizaciones armadas; y frente al próximo proceso electoral para elegir al nuevo presidente de la República (2012-2018), el EZLN parece haber desaparecido del escenario nacional, y sus bases de apoyo se mantienen en resistencia en los Caracoles zapatistas en Chiapas. En tanto, nuevamente, Andrés Manuel López Obrador recorre el país como el candidato de las izquierdas. En este escenario, parece indispensable reflexionar sobre lo sucedido en el proceso electoral de 2006, marcado por el conflicto entre López Obrador y el subcomandante Marcos, y más aún, sobre las situaciones que, desde los movimientos sociales simpatizantes del EZLN, contribuyeron para que en lugar del inminente giro hacia la izquierda, que se suponía llegaría después del levantamiento de los zapatistas, se haya vivido en México el arribo del PAN a la presidencia del país, y una nueva etapa de fortalecimiento del PRI, que parece estar dispuesto a recuperar el control del gobierno y el Estado mexicano.

¿Qué fue lo que sucedió para que no se consolidaran las importantes propuestas de reforma del Estado que se gestaron en México en el amplio movimiento social de apoyo al EZLN? Existen por lo menos dos

lecturas extremas: la que responsabiliza sólo al gobierno mexicano por su carácter antidemocrático y su política antiinsurgente, y la que culpa únicamente al EZLN por su radicalidad y su incapacidad negociadora. Aquí se disiente de ambas posiciones, y si bien no se exime a estos actores de su responsabilidad, se pone atención en los contextos y circunstancias que contribuyeron a limitar las opciones para construir otro escenario: la diferencia de proyectos entre los zapatistas chiapanecos y sus aliados (partidos políticos y movimientos sociales, entre otros); el carácter antagónico entre el EZLN y el gobierno federal; y las contiendas por el poder que, como parte del cerco político contra el EZLN, evitaron que las diversas fuerzas políticas del país acordaran un nuevo y alternativo proyecto de nación. Elementos que en conjunto contribuyeron a determinar los márgenes de las posibles negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal; a acotar los acuerdos políticos entre actores potencialmente aliados; a definir la participación política del EZLN en el escenario nacional, y a evitar, finalmente, la reconversión del EZLN en fuerza política legal. En este trabajo, entonces, se trata de traer a la memoria un conjunto de hechos poco conocidos sobre las alianzas y los conflictos que vivieron, después de 1994, los principales actores que se propusieron consolidar el cambio social en México.

2. LA OPCIÓN POR LAS ARMAS

Definir las causas que conducen a una población a levantarse en armas es un problema sin resolver para los estudiosos de los movimientos sociales. Es común establecer en la historia de un pueblo una línea de continuidad entre todas sus rebeliones como producto de su resistencia y de sus ansias de libertad, aunque queden sin esclarecerse satisfactoriamente las peculiaridades de sus momentos de paz y sus momentos de guerra. Es común también ubicar los orígenes del levantamiento de un pueblo por sus condiciones de pobreza, marginación y explotación, aunque ciertamente esos elementos estructurales no sean suficientes para dilucidar por qué en esos y otros sitios con condiciones estructu-

rales similares hubo quienes no se involucraron en movimientos armados. En ambos enfoques prevalece el determinismo: en el primero se privilegia la dimensión subjetiva de los sujetos y parece que basta la voluntad para decidir la construcción y el arraigo de un movimiento armado y provocar el cambio social; y el segundo sobreestima las condiciones estructurales y se les niega a los sujetos la capacidad de decisión para construir opciones y seleccionar los métodos para provocar el cambio social que anhelan.

Particularmente sobre el caso del EZLN se han escrito cientos de cuartillas reproduciendo algunos argumentos que han contribuido a configurar “un Chiapas imaginario” (Viqueira, 1999) para explicar el origen y las causas del levantamiento armado, pero que son inútiles para entender por qué otras poblaciones indígenas y campesinas, de la misma región y con una posición social similar, no tomaron las armas y se han opuesto, incluso, a los zapatistas. De acuerdo a ese imaginario, los indígenas después de 500 años de opresión y resistencia continua no habrían tenido más remedio que tomar las armas para evita su aniquilación frente a las reformas hechas al artículo 27º de la Constitución y a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de las Américas. Dentro de esa lógica, el levantamiento zapatista sería la única respuesta indígena posible una vez que todos los caminos de negociación con el gobierno estuvieron agotados. Apoyan tal argumento los investigadores que al relatar la injusticia, la opresión, la impunidad y la barbarie con la que han respondido los poderes locales y federales ante las luchas de los habitantes rurales, indígenas y campesinos de Chiapas, interpretan esos movimientos sociales como si fueran homogéneos. Es decir, a pesar del gran rigor histórico en muchos de estos estudios subyace el supuesto de que quienes han participado en todas esas luchas indígenas y campesinas contra la opresión —hasta culminar con el levantamiento del EZLN— son un mismo actor, cuyo movimiento social se extiende en el tiempo y en el espacio chiapaneco. Perspectiva que deja en la penumbra las razones que evitaron que el movimiento armado se extendiera por todo el territorio chiapaneco, e inclusive por todas las regiones de México, cuyos pobladores tienen similares historias de injusticia y opresión.

Esta forma de explicar los movimientos armados se suma a otro de los imaginarios construidos después de 1994, en el que se supone que el EZLN, por todo lo anterior, tuvo en sus momentos de auge la legitimidad suficiente para hablar en nombre de todos los indígenas del país; de allí que generalmente se da por sentado que todas las organizaciones indígenas de México se articularon con los zapatistas chiapanecos para formar un solo movimiento social, en el que se le concedió al EZLN la capacidad de representar y de ser la voz de todos los indígenas de México.

La difusión de estos imaginarios —que suponen el despertar del “Méjico bronco”, del “Méjico Profundo” personalizado en los indígenas— se ha asentado sobre el desconocimiento de las particularidades históricas de las diversas regiones de Chiapas que conduce a extrapolar los procesos de una región a otra, e inclusive a todo el país; y se ha apoyado en la omisión de los análisis que demuestran que los indígenas chiapanecos lejos de ser resultado sólo de la resistencia milenaria, si bien mayoritariamente pobres y explotados, son producto, también, de lo que ha significado la consolidación de la nación y el Estado mexicano: de su modelo de desarrollo económico, de sus políticas públicas, de su sistema político así como de su oferta ideológica y modernizadora, ahora impregnada por el actual proceso de globalización. Todo lo cual contribuyó a generar diversos actores sociales, hasta hoy con visiones y proyectos diferentes sobre lo que debe ser el futuro y el cambio social.

Partir del supuesto de la continuidad histórica entre movimientos y actores sociales, ha imposibilitado, por demás, que se dé cuenta de los encuentros y desencuentros entre las diversas organizaciones indígenas, en Chiapas, tanto antes de 1994 como después de esa fecha.¹ Parte de la confusa percepción acerca del EZLN, y de la expansión de su proyecto político entre otros actores, tiene que ver con el discurso zapatista acerca del poder, que lo supone ajeno a todo conflicto asociado a él, y que lo libera de analizar sus conflictivas relaciones con otros actores, incluidas otras organizaciones indígenas, con los que se ha enfrenta-

1. Una detallada investigación sobre las conflictivas relaciones entre el EZLN y el resto de las organizaciones indígenas de Chiapas y de México se presenta en mi libro *Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las organizaciones indígenas de México*, INAH, México, 2005.

do, precisamente, por cuestiones de proyecto, representatividad, liderazgo y poder.

En oposición a los planteamientos arriba señalados, aquí se considera que Chiapas, en el momento del levantamiento del EZLN, era un espacio social dividido y organizado regionalmente en el cual predominaba la diversidad geográfica, social, cultural y demográfica, y cuya dinámica estatal —así como la de cada una de sus regiones— estaba en permanente interacción con el poder federal de la nación y lo que han sido sus políticas públicas.² En ese contexto, se considera que entre los indígenas y los campesinos de Chiapas existían diferencias sociales y culturales que les daban características y perfiles de identidad propios; y que, desde sus peculiares condiciones, emprendieron movimientos sociales específicos, no siempre concordantes entre sí, en cuanto a objetivos e intereses y menos en relación con las estrategias para llevarlos a cabo. Hablan de esta gran diversidad las más de doscientas organizaciones indígenas y campesinas existentes en Chiapas en 1994. Y si bien, estos actores tan diversos pudieron tener ciertos elementos en común (por ejemplo, la lucha por la tierra), ello no siempre fue suficiente para que pudieran —y les interesase— consolidar movimientos comunes, y menos aún para borrar las diferencias de intereses que, inclusive, los hicieron contender entre sí. De esta manera, la emergencia de un movimiento social armado en Chiapas, y el arraigo de éste únicamente en ciertas regiones y entre ciertos sectores de la población, puede entenderse sólo como producto de una conjunción de factores, estructurales unos y coyunturales otros, en los que desempeñaron un papel central los sujetos, asumidos como actores sociales al decidir organizarse sobre la base de una identidad común y de ciertos proyectos de acción colectiva,

2. Ante la abrumadora cantidad de datos e interpretaciones erróneas sobre Chiapas, generadas después de 1994, diversos especialistas se propusieron escribir y difundir una obra de calidad académica que dio como resultado el libro *Chiapas: los rumbos de otra historia*, cuyos editores son Juan Pedro Viqueira y Humberto Ruz, publicada por la UNAM, CIESAS, CEMCAy la Universidad de Guadalajara, en 1995. En esta obra es posible advertir la diversidad de situaciones y contextos presentes en esa entidad.

que podían diferir de los proyectos de otros actores; y mediante los cuales, incluso, se luchaba, no sólo por el control de los recursos naturales, los financiamientos públicos, el poder y el liderazgo, sino por el sentido y el alcance de los cambios sociales que se pretendían conseguir. Sólo desde esa perspectiva puede entenderse la existencia de indígenas y campesinos que dentro de la zona de emergencia del EZLN, así como en otras regiones de Chiapas, decidieron mantenerse al margen de la lucha armada y que inclusive se confrontaron con los zapatistas. Con una visión similar se consideran las relaciones del EZLN con las demás organizaciones indígenas de México con las que entró en contacto después de 1994.

3. LA DIVERSIDAD DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS

México es un país con una gran diversidad de grupos lingüísticos y culturales³ y en el contexto de sus relaciones con el Estado nacional, los pueblos indígenas no han quedado fuera del resurgimiento de los conflictos étnicos en el mundo. De esta forma, en 1994 el levantamiento del EZLN evidenció la existencia de relaciones interétnicas, entre indígenas y no indígenas, conflictivas, añejas en su antagonismo y violentas en su cotidianidad. Relaciones en las que los indígenas ocupan el lugar subordinado y en donde pueden combinarse las relaciones de explotación con el racismo y la discriminación. Sin embargo, la emergencia de los pobladores originarios como actores sociales no nació con el levantamiento armado de Chiapas. Bajo el rostro de verse, pensarse y proyectarse como “movimiento indígena”, este actor, en 1994, tenía más de 30 años de lucha y se ha construido a la par que se ha consolidado su oposición a los términos en

³ Se emplearon para esta parte: el artículo de Alberto Melucci, “Las teorías de los movimientos sociales”. *Revista de Estudios Políticos*, 2, vol. 5 (abril-junio de 1986), México; el artículo de Gilberto Giménez, “Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos”. *Revista Mexicana de Sociología*, 2, año LVI (abril-junio de 1994); Alberto Melucci, *L'invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni individuali*, Società Editrice Il Molino, Bologna, 1992, y las conferencias presentadas por Melucci en El Colegio de México, en septiembre de 1995, “Movimientos sociales en una sociedad planetaria”.

que los indígenas están inscritos dentro del Estado nacional y conforme sus luchas se enfocaron a lograr cambios dentro de la estructura del Estado para darle obligatoriedad y legalidad a su presencia en la sociedad nacional. En tal emergencia han influido: las políticas e instituciones del Estado mexicano que contribuyeron a formar líderes e interlocutores capacitados; la conciencia indígena de que las relaciones interétnicas implican un tipo específico de dominación; las acciones de una gran diversidad de actores sociales que han mediado las relaciones entre los indígenas y el gobierno mexicano, y, desde el exterior, los movimientos de liberación nacional en África y los movimientos indígenas latinoamericanos.

El camino para construir un movimiento nacional indígena, sin embargo, ha sido lento y no siempre ha seguido los mismos pasos, así que en él no han participado ni todas las poblaciones indígenas ni todas sus organizaciones. Entre los que sí han tomado ese camino, los indígenas tuvieron que pasar del conflicto étnico interpersonal, comunitario y regional (generalmente asociado con formas de dominación y explotación económica) al conflicto con el Estado nacional (que incluye demandas por el reconocimiento de derechos propios y por tener espacios en las instancias de decisión y gobierno), y ha requerido de ciertas dimensiones de conciencia y de organización. Y es allí, en ese proceso de concientización en donde han participado —a veces de manera intencional y otras de forma casual e indirecta— muchos agentes: los antropólogos, las instituciones indigenistas, los indigenistas, los antiindigenistas, las iglesias, diversos organismos internacionales, las ONG, y de forma significativa las élites de intelectuales indígenas formadas en interacción y/o conflicto con estos agentes.

En cuanto a los espacios de conflicto, confrontación y negociación entre las poblaciones indígenas y las entidades gubernamentales éstos son muy diversos y expresan la complejidad de relaciones económicas, políticas, culturales y simbólicas que se han generado a lo largo de muchos años. Se expresa en el ámbito local, en la confrontación entre las formas de gobierno que los pueblos originarios consideran propias y tradicionales y las que se imponen desde el Estado. En el ámbito regional, se advierten en la lucha agraria, que de parte del Estado es vista y tratada como un problema de tierras, mientras que desde los grupos

originarios se trata cada vez más como un problema de territorios. En el ámbito de los municipios se manifiesta en la pugna por el control de los espacios de gobierno, y en las luchas para que las formas de poder y de gobierno sigan la lógica ancestral de cada pueblo, o se imponga la del Estado. Y en el ámbito nacional, se expresa en la contienda por el tipo de reformas constitucionales que han de llevarse a cabo para reconocer los derechos indígenas.

En ese marco general, las formas particulares como las organizaciones indígenas se han relacionado y confrontado con el gobierno mexicano y demandan transformaciones dentro del Estado, han dado lugar a una enorme diversidad de formas de organización y de negociación que involucran tanto a las poblaciones indígenas como a las instituciones de gobierno. Así, se han creado organizaciones de carácter productivo, comercial, cultural y político, en ámbitos locales, regionales y nacionales, y, en ellas, las demandas y los niveles organizativos han sido variados, por lo cual no todas las organizaciones se han propuesto modificar del mismo modo sus relaciones con el Estado nacional.

Sólo para señalar la magnitud de la diversidad de formas organizativas en México, cabe decir que en 1994 había en México 41,901 figuras asociativas rurales muchas de las cuales estaban formadas por población indígena. Además de que existían ciertas organizaciones indígenas de tipo político, algunas en ámbitos urbanos y con pretensiones de representatividad nacional y de actuación política también en el ámbito nacional. De ese gran total de organizaciones rurales sólo 1234 constituían empresas de segundo y tercer grado por su nivel de integración, lo que representa 3% del total. Además, de las 1065 uniones de ejidos, funcionaban 840, mientras que de las 136 ARIC's estaban en activo 89. Entretanto en el sector privado había 4 organizaciones gremiales de cúpula, entre el sector social existían 23 organizaciones gremiales y centrales agrarias de carácter nacional, y de ellas sólo 11 participaban en el Congreso Agrario Permanente. Asimismo, se hallaban innumerables organizaciones gremiales de influencia sólo local y regional (Gómez González, 1995).

Para comprender la actuación de organizaciones de diverso tipo frente al EZLN, cabe ensayar una tipología, que permita comprender la

naturaleza de las organizaciones que entraron en contacto con los zapatistas y el tipo de movimiento social que desarrollaron junto a éstos o en confrontación con ellos.

4. TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Dejando de lado las posiciones idealistas, cobran cada vez mayor vigencia las tendencias que, recuperando la perspectiva estructural y sistemática y sin hacer de las clases el único centro del debate, postulan que el estudio de los actores requiere conocerlos en su acción, en su devenir, y en sus interacciones con otros actores sociales para dar cuenta del proceso en el que un colectivo se construye, se significa, significa para otros, y deviene en actor social con una identidad propia. Con ello el sujeto deja de ser visto como un ente encerrado en sí mismo, o sólo como el punto de llegada de un proceso predeterminado de la organización social. Precisamente los teóricos de los movimientos sociales han avanzado en la formulación de modelos analíticos sobre la acción colectiva que, a la manera de Max Weber, buscan explicar la realidad sin pretender representarla. Dentro de esta corriente Alaine Touraine (1982) define los movimientos sociales como la acción conflictual de actores o de grupos sociales que luchan por el control de los recursos que valoran y que corresponden a los objetivos históricos de la sociedad. Sus tres principales componentes son el principio de identidad, que corresponde a la definición del actor por sí mismo; el principio de oposición, o la definición del adversario; y el principio de totalidad, es decir a nombre del que se enfrenta. En una tesis ya clásica, identifica tres sistemas de relaciones dentro de los cuales se desarrolla la acción social: el modo de producción, el sistema político y la organización social. El primero tiene que ver con las relaciones sociales antagónicas que enmarcan la producción, la distribución y la apropiación de los recursos económicos y simbólicos de una sociedad; el segundo con la producción social de normas de una sociedad; y el tercero con el sistema de relaciones que buscan establecer el equilibrio, la integración y la adaptación de una sociedad. Por su parte, Alessandro Piz-

zorno, preocupado por el origen de los movimientos sociales, descarta la simplicidad de las explicaciones patológicas sobre la génesis de las crisis de los sistemas sociales y en cambio las considera estructurales; y, a diferencia de las explicaciones más comunes que atribuyen la movilización al desequilibrio entre expectativas y recompensas, o bien a la conciencia generada por la existencia de intereses colectivos, este autor asume la identidad como un elemento sustancial de la acción colectiva. Para él, en contraposición a los funcionalistas, ningún modelo analítico que se base sólo en el cálculo de costo-beneficio puede explicar la movilización social, ya que ésta siempre se enmarca dentro de una identidad con sus consecuentes preferencias, valores, perspectivas e intereses (Pizzorno en Giménez, 1994).

Privilegiar el análisis de los procesos y la dimensión subjetiva que orienta las acciones colectivas, ciertamente representa dificultades que los teóricos de los movimientos sociales han buscado resolver mediante la constante reformulación de sus modelos analíticos en su incesante confrontación con la realidad. De esta forma, Alberto Melucci, retomando las tesis fundamentales de su maestro Alain Touraine, ha avanzado en una formulación propia sobre la teoría de la acción que recupera, además, lo esencial de otros autores. Dicha propuesta es la que se ha considerado como la más adecuada para explicar la diversidad de organizaciones indígenas en México.

Para Melucci existen comportamientos colectivos que pueden caracterizarse como movimientos sociales, concebidos éstos como formas de acción colectiva que responden a dos condiciones: son expresión de un conflicto social, y tienden a romper los límites de compatibilidad de un sistema. En este contexto, la acción colectiva se define por la presencia de un conflicto social y de una solidaridad entre los actores: es decir, por la existencia de relaciones sociales que ligan e identifican a aquellos que participan en él. Es entonces, el conjunto de las conductas conflictuales en el interior de un sistema social, e implica la lucha entre dos actores colectivos, cada uno definido por una solidaridad específica, que se enfrentan por la apropiación y el destino de los valores y recursos sociales. En este punto, el autor considera que existen diferentes tipos de movimiento social, y apoyándose en Touraine, plantea que según los sistemas de referen-

cia en los que se desarrolla la acción, éstos pueden ser: movimientos reivindicativos, si expresan conflicto sólo en torno de las normas y roles de la organización social y buscan otro tipo de la distribución de los recursos; movimientos políticos, si expresan conflicto destinado a transformar los canales de la participación política, y a mejorar la posición del actor en los procesos de decisión; y movimientos antagónicos, o de clase, cuando el conflicto que expresan afecta el modo de producción de los recursos de una sociedad. En este último caso, puesto que el conflicto no puede darse más que dentro de una sociedad concreta, los opositores atacan las relaciones de clase, y el ataque a la estructura de dominación pasa por la lucha contra, y por, el poder que detenta una organización. Es decir, pone en cuestionamiento el nexo existente entre la funcionalidad de la organización social y los intereses de diferentes actores. Distinciones que, como se verá más adelante, son las más adecuadas para caracterizar a las diferentes organizaciones indígenas presentes en el escenario nacional.

Respecto a la génesis de los movimientos sociales Melucci considera que es estructural y no coyuntural, aunque no excluye que sean activados por crisis de coyuntura, así como por fuertes motivaciones ideológicas, políticas y culturales de los sujetos. La necesidad del cambio surge, entonces, de la necesidad de controlar, o resolver, el antagonismo que opone a las clases y grupos sociales y culturales; así como de los intereses y las motivaciones de los sujetos para modificar su situación dentro de la estructura social en la que se encuentran. Estos últimos se forman a partir de condiciones determinadas de la producción social, cuando se rompe la relación entre producción y apropiación, cuando se hace difícil ejercer el control directo sobre el destino de los recursos producidos, o necesarios para su producción, y cuando por ello peligran las identidades de grupos sociales subordinados, que se consideran con una cultura y una historia propias.

Según este modelo, las acciones de la mayoría de las organizaciones indígenas y campesinas chiapanecas —la mayoría externas a la zona de conflicto— construyeron movimientos reivindicativos, ya que de forma similar a lo sucedido con muchas otras organizaciones en México, centraron su interés y sus acciones en una mayor distribución de la tierra,

en buscar mejores créditos para la producción y la comercialización, o para reconvertir sus formas de producción a otras más modernas o ecológicas, y sólo coyunturalmente incluyeron demandas políticas y étnicas, como el derecho a la autonomía.

Formaron movimientos políticos, en cambio, las organizaciones indígenas con demandas étnicas, orientadas a conseguir derechos constitucionales y representación política en legislaturas y gobiernos estatal y nacional. Fueron ellas las que impulsaron abiertamente la autonomía, como la vía para obtener derechos indígenas específicos. Y aunque estas organizaciones buscaban transformaciones estructurales del Estado, nunca optaron abiertamente por una transformación radical del sistema que rige el modo de producción, y la distribución de los recursos sociales, ni se propusieron cambiar el conjunto de las relaciones sociales que rige el modo de producción ni el conjunto de las relaciones de dominación. Actuaron así las organizaciones indígenas en su mayoría no chiapanecas, vinculadas al EZLN, y que se propusieron formar un movimiento indígena nacional.

El EZLN, en cambio, se considera que generó un movimiento de tipo radical o antagónico, ya que si bien en esta organización siempre se presentó una permanente tensión entre asumirse como un movimiento indígena reformador y político o como un movimiento de liberación nacional, antagónico y radical, su contienda esencial, según sus propias declaraciones, ha sido por la liberación nacional; y con ello ha pretendido transformar el sistema desde su raíz. Es decir, ha buscado modificar a fondo las estructuras de dominación, el modo de producción y las clases. Y si bien el EZLN, mediante su incursión en la reforma del Estado, se involucró también en acciones propias de un movimiento político, al final lo hizo sólo de manera coyuntural, y permanentemente ha retornado y afianzado sus reivindicaciones y movilizaciones para el cambio radical del sistema.

Por lo difícil y polémica que ha sido la caracterización del EZLN, vale la pena recordar, aquí, un poco de su trayectoria: en un principio (hasta antes de 1994), el EZLN, por sus objetivos y su identidad, creció y se arraigó en Chiapas como un movimiento antagónico, puesto que su contienda esencial era tomar el poder e instaurar el socialismo en México. Después de

1994, sin embargo, su lucha se insertó en el marco de la democracia y se propuso conseguir reformas dentro del Estado, lo que lo condujo por un tiempo a emprender movimientos de tipo político. Nuevamente, empero, en 1996, retomó su objetivo de buscar una amplia alianza social para buscar la liberación nacional y transformar de raíz el sistema social, con lo cual se ubicó, otra vez, a la cabeza de un movimiento de tipo antagónico. Y aunque en los años siguientes formuló demandas políticas de tipo reformador del Estado, su posición antagónica se fortaleció después de las reformas constitucionales sobre derechos indígenas de 2001, cuando consideró que el sistema mexicano y su clase política eran incapaces de emprender transformaciones sustanciales por la vía de la acción política democrática. Tal posición, la expresó abiertamente durante el proceso electoral de 2006, cuando se propuso generar, mediante La Otra Campaña, una amplia y contundente movilización de oposición no sólo al gobierno sino al sistema, incluyendo en la agenda su oposición a los partidos políticos y a los procesos electorales. Todo lo anterior hace suponer que, si bien el EZLN se involucró en acciones propias de un movimiento político reformador lo hizo coyunturalmente puesto que, en diferentes momentos, ha retornado a sus reivindicaciones y movilizaciones que buscan el cambio sistémico radical. Respecto de su identidad, su perfil es complejo y difícil de establecer, ya que si bien está formado en su mayoría por indígenas, y en diversos momentos asumió la representatividad de todos los indígenas de México, también en muchas ocasiones tuvo interés en aclarar que no era un movimiento indígena, pues sus metas trascendían los objetivos de ese tipo de movimientos. Así que por el lugar que tienen las demandas indígenas en su agenda de lucha, al EZLN no se le puede considerar una organización de tipo étnico y sí como una organización que ha luchado por construir un amplio movimiento por la liberación nacional.⁴

4. Los actores así caracterizados, no realizaron solamente acciones que pueden acotarse como pertenecientes a un solo tipo de movimiento social y, por el contrario, la forma como en ciertas coyunturas han pasado de unas a otras, ha posibilitado o inhibido las alianzas entre ellas. La base sobre la que se les caracterizó es en la que estos sujetos sociales han construido como sustento de su identidad, que identifica e integra a sus miembros, los proyecta como movimiento, y, que a la vez, justifica y limita su proyecto de futuro.

Para comprender el tipo de relaciones posibles entre los diversos tipos de organizaciones, hay que repasar a Melucci, cuando señala que son parte sustancial del estudio de los movimientos sociales las reacciones de quienes detentan el poder sobre el, o los sistemas, afectados, puesto que son indicativos de los significados que adquieren las acciones; y porque (aquí se agrega) es en relación con ellos, y en interacción con ellos, que se definen los actores sociales, sus objetivos y la legitimidad de su lucha, así como las posibilidades de sus logros. De esta manera, conforme se pasa de un movimiento reivindicativo a uno político, y de éste a un movimiento antagónico, se observará: a) un contenido simbólico creciente, porque se lucha por objetivos que interesan a la identidad fundamental de los actores y a los fundamentos culturales de la sociedad; b) una negociabilidad decreciente de los objetivos que están en juego y, simultáneamente, una reversibilidad decreciente y una posibilidad de cálculo también decreciente (de los costos y beneficios de la acción, de los efectos, etc.); de manera que, por último, la solución del conflicto tendrá, de modo creciente, hacia la suma cero.

En el caso estudiado se habrá llegado a la suma cero, en 1996, en el momento en que el EZLN decide sacrificar todo lo alcanzado en las negociaciones con el gobierno, ante la rotunda negativa gubernamental a aceptar la renuncia del presidente de la República y establecer un gobierno de transición. Es cuando el EZLN se aleja de las negociaciones, y cuando el gobierno, aprovechando la situación y habiendo fortalecido el cerco antizapatista, congela su interés por negociar con el EZLN. Es en este punto donde adquiere relevancia el análisis de los contenidos de la acción de los actores identificados, así como su grado de compatibilidad o incompatibilidad respecto a los límites del sistema contra el que se lucha. De igual importancia (se agrega a lo planteado por Melucci) es el tratamiento de las posibilidades que los actores suponen que tienen para lograr sus metas, pues es también de acuerdo con ellas como los actores fortalecen o modifican sus identidades, y fortalecen o debilitan sus alianzas.

Respecto a la aplicación del modelo de Melucci hay que decir, sin embargo, que si bien es útil para caracterizar a las organizaciones indígenas y al EZLN, así como para explicar muchas de las dificultades de las alianzas

entre esas organizaciones, no es suficiente para explicar dos aspectos: la configuración de las identidades étnicas y las relaciones de poder en y entre los diferentes tipos de organización, ya que sólo lo considera en juego en el caso de los movimientos de clase, o antagónicos. Al omitir la dimensión de la lucha por el poder en los movimientos reivindicativos y políticos, Melucci deja sin explicar los móviles de sus acciones, e incluso la génesis misma de los grupos sociales en las que se sustentan estas organizaciones sociales. La aplicación del modelo, por lo tanto, se vuelve descriptiva, y la acción colectiva, que se define por la presencia de un conflicto y una solidaridad social, queda sin explicarse cabalmente. Por eso es importante introducir en el análisis la dimensión del poder, entendido éste, en su sentido más amplio, como una parte del esfuerzo global humano encaminado a enfrentarse con su medio y controlarlo, con el fin de hacer más efectiva su supervivencia. Y esa supervivencia está en su capacidad de controlar su medio ambiente y social para reorganizarse a sí misma, en nuevas reestructuraciones de sus relaciones de poder y su organización social. En ese proceso, el control hace referencia a los actos físicos que se ejercen sobre las cosas y los recursos, que son significativos para las sociedades; mientras que el poder es una relación social entre personas y unidades sociales que toman decisiones y actúan sobre el medio social y natural para reproducirlo o cambiarlo.⁵

5. REACCIONES INDÍGENAS ANTE EL LEVANTAMIENTO DEL EZLN

Las primeras reacciones de cientos de organizaciones indígenas y campesinas en relación con levantamiento del EZLN, en 1994, fueron de soli-

5. En la tesis de doctorado, Pérez Ruiz (2000), se ensayó la aplicación del modelo de Richard Adams sobre la organización social y el poder, para explicar la evolución de las organizaciones indígenas en México, que han pasado de ser simples agregados de personas, a grupos de identidad con formas estructuradas de organización: algunas horizontales en la toma de decisiones y otras altamente estratificadas, centralizadas y corporativas. La distinción entre poder y control fue tomada de Adams (1983).

daridad. Algunas de ellas entraron en contacto inmediato con los zapatistas, y algunas buscaron, incluso, crear un movimiento conjunto, tanto en apoyo al grupo armado como para fortalecer su propia lucha; y con ese fin ensayaron foros, marchas y reuniones para organizarse.

El gran momento de unidad entre las organizaciones de diverso tipo, nivel y cobertura fue la conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1994, en la que hubo fuertes movilizaciones en todo el país. De gran relevancia fue la marcha en la ciudad de México que reunió a miles de personas. Sin embargo, en ella pudieron advertirse ya signos sobre el camino que tomarían las diversas organizaciones indígenas y campesinas del país. Ya para esa fecha el EZLN había asumido el carácter de movimiento indígena y con ello la representatividad de todos los indígenas de México, lo que a la larga le trajo problemas con otras organizaciones indígenas.

Las organizaciones campesinas (muchas de ellas con integrantes indígenas), bajo el liderazgo de las centrales nacionales, se concentraron en sus demandas como sector, y ese mismo 10 de abril se quedaron en plantón en las afueras de las dependencias gubernamentales destinadas a las cuestiones agrarias, agropecuarias y forestales. Desde entonces, como sucedió con las organizaciones indígenas y campesinas chiapanecas externas a la zona zapatista, cientos de estas organizaciones fluctuaron entre demandar tierra, créditos y cambio de ayuntamientos o incorporar a sus luchas demandas étnicas y políticas, como la de la autonomía. En cambio, las organizaciones autoconcebidas como indígenas, algunas de bases campesinas pero otras urbanas, bajo el liderazgo de intelectuales de organizaciones nacionales de tipo étnico y del EZLN, se centraron en las demandas por reformar la Constitución mexicana para conseguir derechos indígenas, especialmente el de la autonomía.

Conscientes de sus diferencias, las organizaciones de ambos tipos hicieron esfuerzos por superar las diferencias entre los llamados “productivistas” y los llamados “etnicistas”, y construir un solo movimiento, pero hasta hoy ese objetivo sigue pendiente. En ese marco de diferencia entre organizaciones “campesinistas” y “etnicistas”, en Chiapas sólo las organizaciones y comunidades que emprendieron la lucha por la autono-

mía —y que la ejercieron mediante la formación de espacios territoriales autónomos— pudieron integrar en sus programas ambas dimensiones: la reivindicativa y la política. Aun así, está pendiente el reto de valorar en cuántas de esas experiencias los autonomistas pudieron, a su vez, trascender esos dos ámbitos para construir agendas de lucha más similares a las del EZLN, en términos de conseguir modificaciones sustanciales en las relaciones sociales, en los modos de producir y de reproducir el sistema social, y con una trascendencia mayor a la local.

Pese al interés de todas esas organizaciones de formar un solo movimiento de unidad con el EZLN, pronto se evidenciaron las diferencias que tenían respecto de su identidad, su proyecto particular y sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Diferían respecto del peso que tenían en ellas las demandas agrarias y productivas, los derechos indígenas, las demandas políticas en general, así como el papel que se autoasignaban en la transformación nacional. A tales diferencias se unieron otros factores que imposibilitaron la unidad: entre ellos, las disputas por el liderazgo y la representatividad, el carácter militar clandestino de EZLN y la dinámica del conflicto entre zapatistas y gobierno.

De esta forma, en el marco de las fuertes movilizaciones de finales del siglo XX en México, hubo cientos de organizaciones indígenas y campesinas, de diversas de regiones de México, que sólo coyunturalmente se vincularon con el EZLN y con el movimiento indígena nacional y su demanda autonómica. Por ello, y a pesar de los intentos por construir un amplio y único movimiento social en torno a la autonomía y al EZLN, las diversas organizaciones, a la larga, formaron movimientos no sólo independientes sino diferentes en organización, metas, liderazgos y comportamiento, los cuales llegaron a entrar en conflicto.

6. LAS DIFICULTADES PARA CONSTRUIR UN SOLO MOVIMIENTO SOCIAL

El levantamiento zapatista de 1994 dio nuevos bríos a las luchas indígenas y campesinas: fue un incentivo para acrecentar la lucha por la tierra

entre las organizaciones reivindicativas, y un fuerte impulsó para la reivindicación autonómica entre las organizaciones indígenas políticas.

En efecto, cientos de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de México compartieron, con otros sectores sociales, su fascinación por el EZLN y se vincularon al gran movimiento nacional e internacional que se generó en su apoyo. Compartían con él la necesidad de dar marcha atrás al artículo 27º Constitucional, de resolver las viejas demandas de democracia y justicia social, y de gestar un amplio movimiento de unidad que creara un país más justo, más plural y más democrático, digno y libre. Así que desde diferentes lugares diversas organizaciones indígenas y campesinas emprendieron fuertes movilizaciones de apoyo al EZLN, pero en las cuales exponían también sus propias demandas. Al poco tiempo, sin embargo, surgieron las diferencias y se puso en evidencia que pese al interés común por cambiar el mundo, éste tenía dimensiones y significados diferentes.

Alianza y conflictos entre las organizaciones indígenas de Chiapas y el EZLN

Bajo la influencia del éxito del EZLN, durante los seis primeros meses de 1994 y en las regiones externas a la zona zapatista de Chiapas, alrededor de 280 organizaciones campesinas e indígenas, de diferente signo y orientación política⁶, emprendieron fuertes movilizaciones de apoyo al EZLN, al tiempo que revitalizaban sus propias demandas. Poco después, formaron el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC), que aglutinaba a más de 500 mil afiliados de distintas tendencias políticas. Además, las "mesas de atención" instaladas desde el gobierno federal para encauzar el descontento social imperante en la entidad captaron alrededor de 10 mil demandas, entre ellas muchas destinadas a

6. Las organizaciones que formaron el CEOIC y su tendencia política, puede consultarse en Pérez Ruiz, 2004.

destituir ayuntamientos. El CEOIC, cuya formación se realizó inicialmente con apoyo gubernamental, pronto se independizó y sus acciones se orientaron a presionar y a negociar demandas de tierra y democracia. De este modo, cerca de 100 mil hectáreas de tierras fueron "tomadas" o "recuperadas", fuera de la zona de conflicto, durante los seis primeros meses de 1994 (Pérez Ruiz, 2004).

Mientras un gran número de campesinos e indígenas caían presos o morían en las tomas de tierras, los líderes del CEOIC intentaron en varias ocasiones acercarse al EZLN y al gobierno federal para ser reconocidos como representantes de un tercer actor que debía estar presente en las negociaciones para resolver "el problema de Chiapas"; buscaron, incluso, ser incluidos en las mesas de negociación de San Andrés, pero fue inútil; en parte por la estrategia gubernamental de mantener a los actores sociales disidentes separados y sujetos a sus propios juegos de negociación, y en parte, por la renuencia, o la imposibilidad estratégica, de los zapatistas de renunciar a la representación que habían logrado como voz de todos los indígenas de México.

Inmersas en el desgaste propio de la toma de tierras, bajo la represión y la violencia ejercida desde el gobierno estatal y por los propietarios afectados, así como con conflictos internos por la dirección del movimiento, las organizaciones del CEOIC no pudieron mantener la unidad y pronto se dividieron. El motivo de la ruptura fue la oposición de varias de ellas a que como CEOIC se aliaran con el EZLN y el PRD en la contienda electoral de 1994, en la que se elegiría gobernador y presidente de la República. De un lado quedaron las organizaciones "oficialistas" dispuestas, además, a negociar con el gobierno chiapaneco la dotación de 5 hectáreas de tierra por familia, a cambio de que renunciaran al reparto agrario como demanda de justicia social. Y del otro lado quedaron las organizaciones "radicales" que se negaban al trato de las 5 hectáreas, y que sí estuvieron dispuestas a sellar su alianza con el EZLN y el PRD en la Convención Nacional Democrática para apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para presidente de la República, y de Amado Avendaño, como gobernador de Chiapas.

Con el paso del tiempo, sin embargo, aun estas organizaciones simpatizantes de los zapatistas enfrentaron problemas de lealtad hacia ellos, ya que al no participar como actores directos en las negociaciones entre el EZLN y gobierno federal, no pudieron soportar los ritmos y los tiempos establecidos para las Mesas de Negociación en San Andrés Larráinzar. Tenían la premura que les marcaban sus propias circunstancias, como tener decenas de líderes asesinados o presos, vivir la violencia ejercida por los propietarios afectados por las tomas de tierras, así como intentar resolver los problemas referentes a las más de 100 mil hectáreas de tierra tomadas, más los de otras tantas hectáreas inmersas en litigios agrarios.⁷ Para dividir aún más a estas organizaciones chiapanecas, el gobierno estatal, en alianza con los ganaderos y los propietarios de fincas agrícolas, optó por resolver los litigios y los problemas de las tomas de tierras, beneficiando a las organizaciones campesinas e indígenas opositoras a las que tenían tomadas las tierras. Lo cual generó confrontaciones y hechos violentos entre las organizaciones que tenían tomadas las tierras y aquellas que eran las beneficiarias de los acuerdos con el gobierno.

Cuando después de varios meses de cruenta lucha las organizaciones disidentes aceptaron negociar por su cuenta con los gobiernos estatal y federal, fueron acusadas de traidoras por los zapatistas. Y aunque se reconciliaron tiempo después, en los hechos permanecieron como movimientos diferentes, cada vez más distantes, y las organizaciones del CEOIC radical tuvieron que aceptar, poco a poco, la negociación de las 5 hectáreas de tierra por familia, y sus acciones fueron menguando hasta casi desaparecer del escenario estatal y nacional (Pérez Ruiz, 2005).

7. Entre 1994 y 1995 fueron desalojados 260 predios, 21 alcaldías y 80 bloqueos carreteros; se encarcelaron a 1184 campesinos, fueron destruidas 1115 casas; 60 personas fueron asesinadas; se giraron 2500 órdenes de aprehensión, y 1184 campesinos estuvieron sujetos a procesos penales, muchos de ellos por delitos prefabricados (Pérez Ruiz, 2005).

Alianza y conflictos entre las organizaciones indígenas políticas y el EZLN

Igualmente complejas fueron, y son aún, las relaciones entre el EZLN y las organizaciones indígenas no chiapanecas, en especial con las de perfil político y étnico. Aquí, sin embargo, cabe aclarar que, contrario a lo que comúnmente se cree, fue el grupo de líderes, intelectuales y organizaciones que desde hacía muchos años venían luchando por la autonomía, quien aportó al zapatismo chiapaneco la dimensión política, nacional e internacional de la lucha indígena, inexistente en los documentos iniciales del EZLN. Este núcleo de líderes indígenas y de intelectuales no indígenas, fue el principal impulsor de la autonomía indígena en ámbitos nacionales. Y fue ese mismo núcleo el que participó activamente en la organización de las marchas campesinas e indígenas y demás manifestaciones públicas que lograron detener el ataque armado contra los zapatistas en Chiapas. Fue, además, el que asesoró a los zapatistas en el Diálogo de la Catedral (febrero-marzo de 1994); el que le brindó a la dirigencia del EZLN muchos de los argumentos sobre derechos indígenas para que rechazara, por insuficientes, los 32 posibles acuerdos emanados del Diálogo de la Catedral (junio de 1994); el que le aportó la dimensión indígena a la Convención Nacional Democrática realizada en Aguascalientes, Chiapas (agosto de 1994); el que participó asesorando a los zapatistas en los Diálogos de San Andrés (octubre de 1995 a septiembre de 1996); pero sobre todo, y mediante el movimiento que impulsó para reconocer al EZLN como indígena, este núcleo de líderes y organizaciones fue quien contribuyó sustancialmente a darle al EZLN la legitimidad política indispensable para que el gobierno aceptara y pudiera negociar con una organización armada y oficialmente ilegal.

Además de apoyar al EZLN en 1994, este conjunto de líderes, dirigentes de organizaciones indígenas e intelectuales, se propuso impulsar la construcción de un movimiento nacional indígena articulado en torno a la demanda autonómica. Mediante redes y vínculos diversos, lograron amplias movilizaciones de organizaciones campesinas e indígenas, diversas en historias, composición y formas organizativas, y fue-

ron fortaleciendo foros de discusión sobre la autonomía indígena y para apoyar al EZLN. Así, nutrieron con sus propuestas sobre autonomía al movimiento campesino articulado en el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas Chiapas (CEOIC); convocaron, mediante la Convención Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas, a los partidos políticos a discutir sus plataformas para las elecciones presidenciales (marzo de 1994); promovieron y participaron activamente en las Jornadas Zapatistas de Liberación Nacional *¡Zapata Vive!*, realizadas en todo el país para conmemorar la muerte de Emiliano Zapata (10 de abril de 1994); contribuyeron a estructurar el sentido autonómico de la lucha municipal en ciertas regiones de Chiapas al promover el decreto por el cual más de 20,000 indígenas acordaron declarar territorios autónomos pluriétnicos en Chiapas (12 de octubre de 1994); sentaron las bases conceptuales e ideológicas para la formación posterior de los municipios autónomos zapatistas (1996), y establecieron muchos de los contenidos de los foros mediante los cuales se reconstruyó, matizó y obtuvo consenso la propuesta sobre la autonomía como opción para el reconocimiento de los derechos indígenas en México.

Estás organizaciones indígenas, en un primer momento, se articularon con el EZLN como movimientos independientes, unidos por el objetivo común de luchar por derechos indígenas: el movimiento indígena nacional se propuso lograr consensos nacionales en torno a la autonomía regional pluriétnica, y el EZLN asumió el compromiso de aceptar los resolutivos conseguidos por éste a lo largo de todo el país, y llevarlas como suyas a la primera ronda de negociaciones con el gobierno federal en San Andrés.

Los problemas en esta alianza, sin embargo, fueron inocultables durante el I Foro Nacional Indígena, convocado por los zapatistas en enero de 1996, ya que fueron evidentes las discrepancias en el interior del propio movimiento indígena nacional (unos querían la autonomía regional pluriétnica y otros la autonomía municipal y comunitaria); además de que, ya para entonces, el EZLN había comprendido la imposibilidad de negociar la autonomía regional pluriétnica, no sólo por las discrepancias en el interior del movimiento, sino por la distancia que tal demanda creaba con otros sectores sociales, no indígenas, con los

que le interesaba crear alianzas, para avanzar en las siguientes mesas de negociación con el gobierno.

Con los primeros acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, firmados por el EZLN y el gobierno federal en febrero de 1996, sobrevino la división entre las organizaciones indígenas y sucedió el alejamiento de un sector de ellas respecto a los zapatistas. Para algunas, había que aceptar lo conseguido en San Andrés y a partir de ello apoyar al EZLN en sus decisiones, ritmos y estrategias tanto de negociación como de resistencia. Para otras, lo conseguido estaba por debajo de lo acordado por el movimiento indígena nacional, y se debía continuar luchando hasta conseguir lo pactado; y si bien señalaban que había que mantener la solidaridad hacia los zapatistas, consideraban que el movimiento indígena debía mantener su propio camino y no quedar sujetos a las decisiones del EZLN. La realización del Congreso Nacional Indígena, en octubre de 1996, fue un intento para aglutinar a las organizaciones discrepantes y fortalecer al movimiento indígena nacional, pero en su seno se volvieron a repetir las diferencias de posiciones, que en el fondo tenían que ver con la decisión de mantener la independencia del movimiento indígena nacional o subordinarlo a la dinámica del EZLN.

Otro hecho que contribuyó a dividir al movimiento indígena nacional y a debilitar sus vínculos con el EZLN, fueron los resolutivos fundamentales del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), en septiembre de 1997, cuando se decidió que la participación en dicho frente tenía que ser individual, y sus integrantes no podrían asumir puestos de gobierno ni de representación en los congresos. Con ello quedaron fuera del FZLN todas las organizaciones indígenas cuyos miembros y líderes actuaban por mandato de sus comunidades —y no de forma individual—, y que por muchos años habían peleado por tener voz y presencia en los órganos de gobierno y de representación popular (Pérez Ruiz, 2005).

Desde entonces en cada proceso electoral las organizaciones indígenas enfrentan el dilema de participar o no en la lucha por ganar presidencias municipales o puestos de elección popular. Para algunos, actuar fuera de las estrategias del EZLN es contribuir a cercarlo, y a debilitarlo. Para otros, sí

debe participarse en las elecciones, y en general, en la vida política nacional, pues ello responde a las necesidades y demandas de sus bases.

Los dilemas sobre el, o los caminos, que debería seguir el movimiento indígena se presentaron nuevamente durante el proceso electoral de 2000, que culminó con el triunfo electoral de Vicente Fox por la presidencia de la República. Y se hicieron visibles, también, en las elecciones presidenciales de 2006: muchos simpatizantes e integrantes del CNI, apoyaron La Otra Campaña encabezada por el subcomandante Marcos (en ese momento Delegado ZERO), y muchos de los integrantes de la ANIPA apoyaron al PRD y a Andrés Manuel López Obrador.

Hasta hoy, el movimiento indígena nacional está fracturado y debilitado, y su presencia es casi nula en el escenario nacional; y si bien en ciertos momentos logró movilizaciones importantes en apoyo al EZLN (como sucedió con la marcha del color de la Tierra en 2001, que incluyó el paso por 12 entidades del país, alrededor de 3,000 kilómetros recorridos y una apoteótica y triunfal entrada del EZLN al zócalo de la ciudad de México) en general tiene un papel colateral en la dinámica conflictiva entre el EZLN y el gobierno federal; y su visibilidad nacional ha disminuido hasta casi desaparecer.

7. LAS CONFLICTIVAS RELACIONES ENTRE EL PRD Y EL EZLN

El PRD es otro de los actores con los cuales los zapatistas mantuvieron relaciones de alianza y de conflicto, y que influyeron para que el EZLN retornara a su propuesta radical de luchar, ya no para reformar el Estado, sino para cambiar de sistema social.

Como punto de partida hay que decir que si bien el PRD siempre se ha opuesto a una salida militar y no negociada del conflicto en Chiapas, sus bases y dirigentes, han vivido la tensión permanente entre aliarse y apoyar casi incondicionalmente al EZLN o seguir un proyecto propio, a veces con-

cordante y a veces opuesto a las necesidades y expectativas zapatistas.⁸

De esta forma, en 1994, en el marco de la Convención Nacional Democrática (CND), zapatistas y perreditas hicieron su primer pacto público: Cuauhtémoc Cárdenas asumió el programa político del EZLN (un nuevo constituyente y una nueva Constitución) y a cambio los zapatistas prometieron apoyar las candidaturas del PRD (la estatal y la nacional) y promover la revuelta social si ganaba el PRI. Ganó en PRI, no se pudo demostrar legalmente el fraude y se incendió Chiapas; pero Cárdenas, por razones no explícitas públicamente, no aceptó ponerse a la cabeza del movimiento de liberación nacional pactado con los zapatistas, ni estuvo de acuerdo en movilizar al país en contra de los resultados electorales.

En 1995, ya instalada la I Mesa de Negociación, hubo elecciones en Chiapas para renovar presidencias municipales. Muchos de los candidatos dentro de la zona de conflicto eran zapatistas y a la vez perredistas. Una alianza que para muchos militantes de base de ambas fuerzas era casi natural. Un día antes de las elecciones, sin embargo, el subcomandante Marcos hizo un llamado para no votar, y el PRI ganó las elecciones dentro de la zona zapatista, con las previsibles consecuencias de agudización del conflicto local. Marcos, explicó en carta pública que el EZLN no se había levantado en armas para que ganara el PRD.

En 1996, al foro zapatista sobre la reforma del Estado, asistieron masivamente dirigentes sindicales, activistas e intelectuales de diversos partidos políticos, incluyendo a varios priistas, y por supuesto a varios dirigentes del PRD. En ese marco, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador (que se vislumbraba como futuro presidente del PRD) se entrevistaron con el subcomandante Marcos para proyectar una nueva alianza con miras a las elecciones de 1997. Es decir, después de que se firmaran los acuerdos de la II Mesa de San Andrés, sobre Democracia y Justicia, el EZLN estaría en condiciones de volverse fuerza política legal, y apoyaría en las elecciones al gran Frente Opositor, que encabezaría Cárdenas, para terminar, mediante las urnas, con

8. Un desarrollo detallado de los contextos y expresiones del conflicto entre el PRD y el EZLN, pueden leerse en Pérez Ruiz (2005). Aquí, por cuestiones de espacio, sólo se enuncian algunos de los hechos que expresan tal conflicto.

la hegemonía política del PRI.

Sin embargo, como se verá en el apartado siguiente, el PRD firmó, pocos meses después de este acuerdo (no escrito, por cierto), la reforma electoral de 1996, que aisló políticamente a los zapatistas, mientras que Cárdenas se lanzaba a luchar por la gubernatura de la ciudad de México, con el apoyo de López Obrador, que era entonces la cabeza del PRD. Que se sepa, no hubo explicación pública alguna sobre el abandono de la alianza pactada con los zapatistas en el Foro Zapatista sobre la Reforma del Estado, ni sobre por qué se dejó de lado el proyecto de formar el gran frente opositor que incluía al EZLN.

La respuesta zapatista a este abandono pudo verse en 1997, cuando se formó el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) cuando quedaron fuera de él los perredistas, ya que se prohibió la doble militancia y que sus miembros lucharan por puestos de elección popular. Por su parte, el PRD, en 1998, en su IV Congreso, se deslindó públicamente del EZLN a quien consideró de izquierda radical.

En el año 2000, se vio ya a un EZLN incrédulo del proceso electoral, con llamados parciales a no votar, pero que aún confiaba en los legisladores; de allí que en su Quinta Declaración de la Selva Lacandona pusiera en sus manos la aprobación de la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (cocopa), como un paso fundamental para la firma de paz.

La última gran movilización zapatista, en 2001, la Marcha por la Dignidad Indígena, no logró, sin embargo, el objetivo de que el poder legislativo hiciera a un lado sus intereses y sus visibles pugnas de poder inter e intra partidistas y que, como un paso hacia la paz, los legisladores de los diversos partidos políticos aprobaran la iniciativa de ley elaborada por la cocopa y avalada por el EZLN.

Así que en 2001, el PRD apoyó en las cámaras la aprobación de las reformas en materia indígena que no eran las propuestas por la cocopa y avaladas por el EZLN, y uno de los legisladores que lo hizo fue Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. La fractura entre EZLN y PRD era ya un abismo. Nunca más los zapatistas aceptaron entrevistarse con los legisladores perredistas y el subcomandante Marcos abandonó los planteamientos sobre la reforma del Estado de los últimos años. Dentro de la zona de conflicto en

Chiapas, además, eran cada vez más violentas las relaciones entre perredistas y zapatistas y en ese contexto estos últimos emprendieron el replanteamiento de su proyecto como EZLN: los zapatistas formaron los Caracoles como organización regional en la zona zapatista, dejaron los gobiernos autónomos en manos de sus bases, sacaron de la luz pública a sus milicianos e insurgentes, y se alejaron de los procesos electorales, recuperando su propuesta de la movilización social como motor del cambio social.

Y así se llegó al proceso electoral de 2006, donde se vivió una abierta oposición del Delegado ZERO en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD a la presidencia de la República. El triunfo fue para Felipe Calderón, del PAN, como presidente de la República, la continuidad de un modelo económico que propicia la desigualdad social, el fortalecimiento de un sistema político que privilegia a los partidos políticos y omite la participación ciudadana independiente, y una política de Estado que criminaliza la disidencia y la protesta social.

La ruptura entre zapatistas y perredistas, que sorprendió a algunos e indignó a otros, sería incomprendible sin atender a la conflictiva relación entre perredistas y zapatistas, y sin analizar el papel que los miembros del PRD jugaron, voluntaria o involuntariamente, en la construcción del cerco político antizapatista, así como en la aprobación de la llamada Ley indígena de 2001, que marcó la ruptura definitiva entre estos dos actores. Ruptura que seguramente influyó para quitarle presión al Ejecutivo en sus esfuerzos para acordar la paz con los zapatistas, así como en el balance de fuerzas en el Congreso, y en los ánimos de los partidos políticos, más interesados en conservar sus privilegios y prebendas, que en transformar democráticamente al país.

8. EL ANTAGONISMO ENTRE EL EZLN Y EL GOBIERNO FEDERAL

Un aspecto fundamental para comprender la dinámica del conflicto es recordar que entre el EZLN y el gobierno federal, aún hoy, media una declaración de guerra que hace de ellos actores antagónicos; mismos que

aunque emprendieron negociaciones para la paz, construyeron simultáneamente escenarios paralelos en los que se disputaban la legitimidad social y en los que realizaban acciones para menguar, subordinar o acabar con el “enemigo”.

De esta forma, aunque el EZLN incursionó en procesos de reforma del Estado (mediante iniciativas sobre derechos indígenas y para la democracia), siempre tuvo en la mira provocar movilizaciones sociales capaces de generar transformaciones más radicales, como la renuncia del presidente de la República y establecer un nuevo constituyente y una nueva Constitución. Y en ese trayecto de ida y venida, entre ser un movimiento reformador o uno radical, fue variable su capacidad negociadora y el manejo simbólico e ideológico con el cual se proyectaba: asumía carácter de movimiento indígena en momentos de aislamiento y debilidad, y de movimiento de liberación nacional cuando estaba fortalecido por sus alianzas con diversos actores opositores al gobierno.

De igual forma, el gobierno mexicano, mientras negociaba con los zapatistas, también emprendía acciones destinadas a anularlos y en ese ir y venir, también fluctuaba entre abrir espacios políticos que los incluyeran o realizar acciones para acabar con ellos.

Las iniciativas zapatistas para ganar presencia nacional, así como la construcción de un cerco múltiple en torno al EZLN, expresan esa tensión y confrontación permanente entre ambos actores, aunque ambos dijieran que negocian para construir la paz.

El cerco antizapatista gubernamental ha sido múltiple y muchas veces simultáneo. Los más conocidos: el militar, el paramilitar y el judicial; los menos conocidos: el cerco carretero para quitarle al EZLN su capacidad de movilización clandestina; el organizativo, para quitarle representatividad, y “evitar el contagio” zapatista hacia otras zonas y organizaciones de México; y el político, para encauzar el descontento social nacional, y así quitarle “adeptos” y “simpatizantes” al proyecto zapatista.

Para encauzar el descontento social y para romper los cercos gubernamentales, los zapatistas construyeron también escenarios y acciones múltiples: generaron diversos niveles de alianza con actores disidentes, extendieron territorialmente su área de influencia, generaron munici-

pios autónomos en Chiapas, convocaron a diversas consultas nacionales, organizaron foros regionales, nacionales e intergalácticos, convocaron a la Convención Nacional Democrática, crearon el Frente Zapatista de Liberación Nacional y marcharon varias veces a la ciudad de México.

De todos los cercos antizapatistas, aquí se va a enfatizar el político, por tres razones: porque es el más sutil y desconocido, porque ha sido fundamental para quitarle nacionalmente adeptos al proyecto zapatista, y en esa medida debilitar y aislar al EZLN; y porque a la luz de este cerco es cómo se evidencian las luchas de poder entre los actores políticos nacionales, que limitaron la reconversión del EZLN en fuerza política legal.

9. CERCOS ANTIZAPATISTAS

Desde que el Poder Ejecutivo (es decir el presidente de la República), destinatario de la declaración de guerra del EZLN, optó por la negociación y detuvo las acciones armadas el 12 de enero de 1994, se propuso construir un cerco múltiple alrededor de los zapatistas, con el fin de conducirlos hacia negociaciones viables y aceptables para el gobierno, o en su defecto, para debilitarlo hasta anularlo. Un primer paso fue detener el ataque militar hasta que la zona zapatista estuviera rodeada por soldados y bases militares; otro, fue minar las bases de apoyo zapatistas mediante el retorno de los antizapatista a la zona de conflicto, y emprender la distribución de apoyos selectivos, mediante diversos programas sociales; y otro más, fue apoyar directa e indirectamente, la formación de grupos paramilitares, no sólo en contubernio con pequeños y grandes propietarios de tierras afectadas dentro de la zona de conflicto, sino también con grupos políticos opuestos a los zapatistas, muchos de ellos de filiación priista y de adscripción protestante. Otros cercos han sido los ya mencionados: el carretero, el organizativo y el político, destinado este último a restarle legitimidad al EZLN, mediante reformas políticas que, por la vía de abrir espacios para la transparencia y la participación social en la vida pública, le quitara adeptos al zapatismo, al tiempo que encauzara, por vías legales, el descon-

tento social imperante en México.

Precisamente como parte del cerco político, Manuel Camacho Solís —cuando era comisionado para la Paz en Chiapas— tuvo como tarea modificar los términos de la confrontación entre el EZLN y el gobierno federal (1994). Es decir, por una parte debía conducir la declaración de guerra de los zapatistas y su exigencia de que renunciara el presidente de la República hacia un marco de demandas democráticas; y por el otro, debía conducir la demanda del reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante (que según los tratados internacionales firmados por México conducía a negociaciones en el ámbito del derecho internacional) hacia otro camino para que pudiera resolverse dentro del marco jurídico de la Constitución mexicana.⁹ De esta forma, el hecho de que el gobierno federal reconociera al EZLN como movimiento indígena y como un ejército formado por indígenas mexicanos, fue fundamental para no concederle el estatus de fuerza beligerante.

Con esa lógica el comisionado, en los Diálogos de la Catedral (febrero de 1994), estuvo dispuesto a aceptar ciertas demandas indígenas de carácter nacional pero, sobre todo, condujo con habilidad la demanda zapatista que exigía la renuncia del presidente de la República hacia reformas electorales y hacia la promesa de reglamentar el ejercicio de los derechos indígenas en la Constitución. Y sobre esa base, propició que los principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) acordaran tres reformas políticas: incorporar al Instituto Federal Electoral un consejo de ciudadanos independientes, como garantía de la imparcialidad de los procesos electorales; definir procedimientos de observación de las elecciones; y abrir espacios en los medios de comunicación para dar cabida, de forma equitativa, a la pluralidad y a la competencia política. A finales de enero de 1994, se hizo público el Acuerdo de Reformas por la Paz, la Justicia y la Democracia.¹⁰

Con una lógica semejante, orientada a desactivar el descontento so-

9. Alejandra Moreno Toscano en Pérez Ruiz (2005).

10. Revista Proceso, núm. 905, 7 de marzo de 1994, México, y Pérez Ruiz (2005).

cial y de paso quitarle adeptos al EZLN, la Secretaría de Gobernación instaló la Mesa del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado en 1995, en la que participaron el PRI, el PAN, el PRD y el PT (Partido del Trabajo). Esta mesa, en la que los zapatistas se negaron a participar con el argumento de que haría su propio foro (el Foro Especial para la Reforma del Estado), corrió paralelo a la II Mesa de Negociación de San Andrés destinada a los temas de Democracia y Justicia; y la COCOPA, muy activa en esa época, consiguió el acuerdo (entre los partidos y el secretario de Gobernación) de que los resolutivos emanados del foro zapatista se incorporarían como parte de los acuerdos del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. De forma lógica, los acuerdos que emanaran de la II Mesa de Negociación con los zapatistas formarían parte, también, de los acuerdos nacionales para la reforma del Estado.

La dinámica de la II Mesa de Negociación, en ese contexto en el que se debatía en varios frentes el futuro del sistema político mexicano, estuvo llena de obstáculos puestos por las dos partes en conflicto: el gobierno federal era reticente a aceptar las demandas zapatistas destinadas a establecer un sistema político de participación y democracia directa, y no representativa; y el EZLN retomó sus demandas radicales sobre la necesidad de que renunciara el presidente de la República, se estableciera un nuevo constituyente y se elaborara una nueva Constitución. La mesa alargó las fases y tiempos establecidos, y mientras tanto concluyó el Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. Y lo hizo sin incorporar los acuerdos de San Andrés (surgidos de la I Mesa de Negociación), sin los resolutivos del foro zapatista para la reforma del Estado, por supuesto, sin nada de lo avanzado en la II Mesa de Negociación de San Andrés, y sin las propuestas zapatistas como el referéndum, la revocación de mandato, las candidaturas independientes y el plebiscito. No se explicó públicamente la causa de tal incumplimiento, pero puede suponerse que influyó la oposición del PAN, renuente siempre a negociar con grupos armados; la oposición del PRI, representado por Emilio Chuayffet considerado uno de los “duros” y nada simpatizante de los zapatistas; y la pugna interna del PRD, en la que se disputaba la

presidencia de ese partido; además de los conflictos públicos existentes entre Porfirio Muñoz Ledo —aún presidente del PRD y participante en la Mesa para la Reforma del Estado— y el subcomandante Marcos. El 25 de julio de 1996 se suscribieron los acuerdos emanados del Diálogo Nacional, y el 31 de ese mismo mes se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma electoral allí propuesta. Se hicieron reformas a 18 artículos de la Constitución, que modificaron aspectos sustanciales para la vida democrática nacional: se prohibió el corporativismo, los órganos electorales dejaron de ser controlados por el gobierno y se trasladaron a ciudadanos independientes; se integró el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, se propició el control constitucional de actos y resoluciones de las autoridades electorales; se abrió la posibilidad de aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero, se incorporó la representación proporcional en el Senado; se definió un mayor equilibrio entre los principios de igualdad y proporcionalidad de recursos en la contienda electoral; y se aprobó que fuera electo el jefe de gobierno del Distrito Federal.¹¹

La aprobación de la reforma electoral de 1996 fue un avance democrático posible, en gran medida, gracias al levantamiento zapatista, pero tuvo consecuencias fatales para las negociaciones de paz de San Andrés y para el EZLN. La primera consecuencia fue que pre-determinaba y limitaba de antemano los acuerdos a los que se podía llegar con los zapatistas, en la II Mesa de San Andrés, en materia de democracia y justicia; y la segunda, es que aquellos aliados que estuvieron en el Foro Especial para la Reforma del Estado (sindicatos, partidos, dirigentes de organizaciones sociales, las ONG, líderes de opinión, y PRD) —y que habían pactado con el EZLN apoyar su transformación en fuerza política legal y formar un Frente Amplio Opositor—, se volcaron a la lucha electoral de 1997, en la que iba a ser electo el jefe de gobierno para el Distrito Federal y se iba a renovar el Congreso nacional, además de que estaban en juego varias

11. Véase una síntesis de las reformas en *Proceso*, núm. 1030, 28 de julio de 1996.

gubernaturas y presidencias municipales.

En la contienda por la representatividad y la legitimidad, el presidente Ernesto Zedillo —heredero de la declaración de guerra de los zapatistas cuando arribó al poder en diciembre de 1994— se anotó un triunfo político y el EZLN se quedó casi solo. Fue una época de rumores que hablaban de fuertes divisiones en el interior del EZLN, entre los que buscaban su transformación en fuerza política legal y los que se oponían. Ello, con el agravante para el EZLN de que los Acuerdos sobre Derechos Indígenas aún no se habían convertido en ley y de que el EPR apareció por primera vez en Chiapas, disputándole las bases. Los zapatistas se retiraron de las negociaciones de San Andrés, y vivieron un periodo de aislamiento. Fue cuando los zapatistas emitieron doloridos comunicados dirigidos a la sociedad política en los que preguntaban si aún había alguien por allí que los escuchara, y cuando lanzaron reclamos a los que habían estado con ellos sólo “para tomarse la foto”.¹² Al cerrarse más este cerco en torno al EZLN, éste se retiró de las negociaciones con el gobierno federal, con el argumento de que no se había cumplido aún con lo pactado en la I Mesa de Negociación sobre derechos indígenas.

Después siguieron varios intentos de los zapatistas para recuperar presencia nacional y negociar con el gobierno con mayor fuerza: se instaló la vía paralela de negociación en la que la COCOPA elaboró una iniciativa de ley para incorporar a la Constitución los derechos indígenas, se hicieron nuevas consultas nacionales y varios foros. Pero después de que se cerró el cerco político en 1996, existen elementos para suponer que el gobierno perdió interés en negociar con los zapatistas y que, en cambio, estableció desde entonces la “mano dura” contra el EZLN y sus bases de apoyo. A cargo del gobierno chiapaneco quedó el desmantelamiento de municipios autónomos, la remunicipalización, la represión abierta e indirecta, y por supuesto lo que le toca de la aplicación de la estrategia contrainsurgente, vigente hasta hoy. A nivel federal se anuló la CONAI como instancia de mediación, se debilitó a la COCOPA como instancia de coadyu-

12. Comunicados de septiembre y octubre de 1996.

vancia, el gobierno federal se apropió de muchas demandas zapatistas, propició la división y hasta el Ejecutivo (Ernesto Zedillo) se atrevió a formular su propia iniciativa de ley sobre derechos indígenas.

En todo ese proceso, los derechos indígenas, y particularmente la discusión sobre la autonomía, fueron la vía mediante la cual se expresó el conflicto entre el EZLN y el gobierno federal. Dos actores antagónicos, inmersos en una guerra oculta por un supuesto tiempo neutral para negociar la paz. Cada uno luchando por sobrevivir, para debilitar al otro hasta conseguir las mejores condiciones para negociar, o, en su defecto, para acabarlo como su enemigo.

Con los gobiernos del PAN en la presidencia de México, después del año 2000, no han cambiado mucho las cosas, quizás con el agregado de que se apuesta aún más al desgaste, a la división de las bases zapatistas, al apoyo selectivo para agudizar la confrontación local y regional entre zapatistas y antizapatistas, y se promueve el olvido nacional sobre el tema indígena y el EZLN. Incluso la nueva reforma electoral de 2007, fue sorda a las demandas zapatistas sobre nuevas formas de democracia y justicia, y se ratificaron los privilegios y se fortaleció la exclusividad de los partidos políticos para incidir en la vida política nacional.

10. REFLEXIONES FINALES

¿Era posible otro escenario, distinto al que se ha descrito en este trabajo? ¿Podría haberse reconvertido el EZLN en fuerza política legal? ¿Podría el sistema político haberlo permitido? ¿Podríamos, en suma, haber tenido una reforma de Estado profunda y no sólo una reforma electoral que privilegia ante todo a los partidos?

Nunca lo sabremos, pero si hacemos un recuento de los hechos la respuesta que se deriva es que no, por las razones que hemos visto: 1) Por la disparidad de proyectos de los actores que intentaron formar alianzas (uno radical, los otros reivindicativos o políticos), 2) por la incapacidad de estos actores para construir un proyecto alternativo común, 3) porque en lugar de la construcción conjunta, cada quien defendió su propio lide-

razgo, entraron en competencia feroz por el control de las bases y por la hegemonía de su proyecto, y 4) porque, las fuerzas que prevalecieron dentro del gobierno, nunca estuvieron dispuestas a conceder en la Mesa de Negociación lo que los zapatistas no habían conseguido con las armas. Es decir, en el fondo, los miembros del Poder Ejecutivo —seguramente con el apoyo o la presión del Ejército pero también con la anuencia del Poder Legislativo— nunca aceptaron repensar el país para construir reformas profundas que modificaran el tipo de democracia y el tipo de participación y de representación social que tenemos.

Para que hubiera sido posible construir otro desenlace los diferentes actores, sobre todo el EZLN, el gobierno federal y los partidos políticos, deberían haber estado dispuestos a construir opciones más democráticas, aun a costa de perder algunos de sus privilegios. La postura de estos actores, que antepusieron sus intereses particulares a los de un proyecto alternativo nacional, con seguridad conducirá al país a situaciones de mayor polarización social, económica y política, y a un fortalecimiento de organizaciones radicales, de diversos signos. Lo cual augura un futuro nada prometedor para nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams N., Richard. *La red de la expansión humana*. México: Ediciones de la Casa Chata, 1978.
- . *Energía y estructura. Una teoría del poder social*. México: FCE, 1983.
- Arvide, Isabel. *Crónica de una guerra anunciada*. México: Grupo Editorial Siete, 1994.
- Bonfil Batalla, Guillermo. "Utopía y revolución: el pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina". En *Utopía y Revolución*, compilado por Guillermo Bonfil Batalla, pp. 11-53. México: Nueva Imagen, 1981.
- Burguete Cal y Mayor, Araceli. "Desplazando al Estado". En *Tejiendo historias. Tierra, género y poder en Chiapas*, coordinado por Maya Lorena Pérez Ruiz, 143-187. México: INAH, 2004.
- Centre Tricontinental, "Editorial". *Les mouvements sociaux en Amérique Latine*, Alternatives Sud, vol. 1, París: L'Harmattan, 1994.
- Díaz Gómez, Floriberto. "Pueblo, territorio y libre determinación". En *Efectos de las reformas al agro y los derechos de los pueblos indios de México*, compilador David Chacón et al., pp. 219-228. México: UAM-Azcapotzalco, 1995.
- Díaz de Jesús, Marcelino. "Dos candidatos indígenas al Congreso de la Unión: llevar nuestra voz para impulsar la Ley indígena". Ce-Acatl, 87 (junio-julio, 1997): 46-49. México.
- García de León, Antonio. *Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas*

- en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, 2 vols. México: Era, 1985.
- . *Fronteras interiores. Chiapas una modernidad particular*. México: Océano, 2002.
- Gilly, Adolfo. «Fragmentation et resocialisation des demandes et des mouvements sociaux en Amérique Latine», en *Les mouvements sociaux en Amerique Latine*, Alternatives Sud, vol. 1. Centre Tricontinental. París: L'Harmattan, 1994.
- Giménez, Gilberto. «Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos». *Revista Mexicana de Sociología*, 2, vol. LVI (abril-junio 1994): 4-14. México.
- Gómez González, Gerardo. «La organización campesina en el marco de las reformas en materia agraria». En *Efectos de las reformas al agro y los derechos de los pueblos indios de México*, compilador David Chacón et al., 121-140. México: UAM-Azcapotzalco, 1995.
- Gramsci, Antonio. *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1972.
- Cros Christian. «Ser diferente para ser moderno, o las paradojas de la identidad». En *Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XX*, coordinado por Leticia Reina, 171-195. México: CIESAS/INI /Miguel Ángel Purrúa, 2000.
- Harvey, Neil. *La rebelión de Chiapas. Lucha por la tierra y la democracia*. México: Era, 1998.
- Laclau, Ernesto, y Chantal Mouffe. *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso, 1985.
- Le Bot, Yvon. *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista*. México: Plaza & Janés, 1997.
- Legorreta, Ma. del Carmen. *Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona*. México: Cal y Arena, 1998.
- López Bárcenas, Francisco. «Derecho Indígena a la tierra». En *Efectos de las reformas al agro y los derechos de los pueblos indios de México*, compilador David Chacón et al., 189-200. México: UAM-Azcapotzalco, 1995.
- Melucci, Alberto. «Las teorías de los movimientos sociales». *Revista de Estudios Políticos*, 2, vol. 5 (abril-junio, 1986). México.
- . *L'invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni individuali*. Bologna: Società Editrice Il Mulino, 1992.
- . *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México, 1999.
- Meneses, Juan Anzaldo. «Foro Nacional Indígena. Una semilla, un fruto: muchas esperanzas para actuar». *Ce-Acatl*, 76-77 (enero, 1996): 1-8. México.
- . «Las elecciones de 1997 y los pueblos indígenas: reflejo de un presente que se niega a ser pasado». *Ce-Acatl*, 87 (junio-julio, 1997): 3-21. México.
- Pérez-Ruiz Maya Lorena. «Pueblos indígenas, movimientos sociales y lucha por la democracia». En *Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México*, t. 1, 355-418. México: INI/ PNUD, 2000.
- . «Los hombres verdaderos en el Desierto de la Soledad». *Configuraciones*, 3-4 (octubre-marzo, 2000-2001): 6-18. México.
- . «Otro esenario ¿la misma confrontación?» *Configuraciones*, 5-6 (octubre-diciembre, 2001): 23-37. México.
- . *Tejiendo Historias. Tierra, Género y poder en Chiapas*. Colección Científica, México: INAH, 2004.
- . *Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las organizaciones indígenas de México*. México: INAH, 2005.
- Pizzorno, Alessandro. *Le radici della politica absoluta*. Milán: Feltrinelli, 1994.
- Reyes Ramos, María Eugenia. «Reconfiguración del espacio agrario en Chiapas: las consecuencias del levantamiento zapatista». En *Tejiendo historias. Tierra género y poder en Chiapas*, coordinadora Maya Lorena Pérez Ruiz, 71-90. México: INAH, 2004.
- Touraine, Alain. *Mouvements sociaux d'aujourd'hui*. París: les Editions Ouvrières, 1982.

- . *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. Santiago: PREALC-OIT, 1987.
- Varese, Stefano. «¿Estrategia étnica o estrategia de clase?». En *Indianidad y descolonización en América Latina*, 33-48. México: Nueva Imagen, 1979.
- Vilas, Carlos. «Clase, estado y etnicidad en la Costa Atlántica de Nicaragua». *Nueva Antropología*, 38 (1990): 21-43. México.
- . «Actores, sujetos, movimientos: ¿dónde quedaron las clases?». *Revista Sociológica*, 28, vol. 10 (mayo-agosto, 1995): 61-89. México.
- Viqueira, Juan Pedro. «Los peligros del Chiapas imaginario». *Letras Libres*, 1, vol. 1:20-97. México. 1999.